



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx

PAPEL DE LOS JUECES EN CASOS AMBIENTALES*

Jerome SIMANDLE

Esta conferencia aborda tres ejemplos del papel de los jueces en casos ambientales en Estados Unidos. El primero es la revisión judicial de acciones administrativas con base en la Ley Nacional sobre Política Ambiental (*National Environmental Policies Act*, NEPA). El segundo es un caso decidido mediante la Ley de Agua Limpia (*Clean Water Act*), donde el papel del juez se centró en encontrar los hechos relevantes a juzgar en asuntos ambientales complejos. El tercer ejemplo es el papel mixto de los jueces que deben interpretar y revisar las actuaciones de una dependencia administrativa que ha resuelto sobre la limpieza apropiada de un confinamiento sanitario; en este caso el juez busca hechos que le permitan saber quién es el responsable y cuáles deben ser las consecuencias finales para este responsable.

La NEPA exige que la preparación de un informe de impacto ambiental de una dependencia federal se ponga al alcance de la ciudadanía para sus comentarios. Esto debe hacerse en el caso de cualquier propuesta de acción federal con un impacto ambiental significativo. Por su parte, los jueces deben revisar cualquier caso presentado en este sentido por los ciudadanos. La NEPA ofreció procedimientos para los jueces, estableciendo disposiciones y requisitos de procedimiento, pero ellos tuvieron la necesidad de interpretar algunas de estas disposiciones y de establecer el grado de deferencia que se debe dar a esfuerzos administrativos. Por tanto, los jueces tuvieron que familiarizarse con su nuevo papel al aplicar las leyes de evaluación de impacto ambiental obligatorias en todas las dependencias federales.

Un ejemplo de lo anterior sería el caso en ciudadanos estadounidenses buscaban conservar un parque. El gobierno había decidido financiar una carretera interestatal que pasaba por un parque público. Los vecinos

* 2005.

se reunieron y señalaron que el secretario de Transporte había fallado en su obligación de proporcionar una evaluación de impacto ambiental apropiada. La primera pregunta que enfrentaron los tribunales fue sobre el derecho de estos ciudadanos para acudir a la Corte. Se decidió que los ciudadanos contaban con ese derecho, pues habitaban una zona que debía ser protegida con acuerdo a los derechos establecidos en la NEPA y, en segundo lugar, estos ciudadanos eran capaces de demostrar que podrían sufrir un daño en sus personas con la construcción de la carretera.

Estos dos elementos fueron resultado de las decisiones judiciales, pues en la NEPA no hay un capítulo que establezca los derechos de las personas. Los jueces interpretaron el estatuto y, por medio de jurisprudencia, desarrollaron este concepto de acudir al tribunal. En este caso se obligó al Departamento de Transporte a repetir la evaluación de impacto ambiental. Finalmente, el proyecto se detuvo no por decisión del tribunal, sino al encontrarse soluciones alternativas para la construcción apropiada de la carretera.

El segundo ejemplo sobre el papel de los jueces en casos de medio ambiente procede de la Ley de Agua Limpia de 1970. En ese entonces, había en Estados Unidos una preocupación sobre la calidad del agua. Originalmente, la legislación sobre control de la contaminación del agua dependía de los estados, pero este enfoque evidenciaba ciertas debilidades, ya que era muy difícil probar que el daño al medio ambiente lo producía una descarga contaminante específica cuando una sola vía de agua tenía múltiples fuentes de contaminación. La situación cambió en 1972, pues con la Ley de Agua Limpia se requirió la supervisión del gobierno federal; permisos federales y estatales; se estableció la viabilidad tecnológica y económica, y los estándares se hicieron más estrictos con los años. En la actualidad, quien realiza una descarga hacia una vía de agua debe utilizar la mejor tecnología disponible.

Por lo tanto, puedan presentarse demandas de dependencias o de ciudadanos. Estos últimos deberán notificar a las autoridades ambientales estatales y federales la existencia de la infracción y de la contaminación del agua; al pasar 60 días sin acción, la demanda ciudadana podrá proceder. Los ciudadanos pueden obtener la información, ya que por la Ley de Agua Limpia cada compañía con permiso de descargas está obligada a realizar exámenes y a reportar de buena fe los resultados requeridos en ese permiso. Esta información se pone a disposición pública para contribuir a la transparencia. Las demandas de los ciudadanos son un apoyo

muy importante para alertar a las autoridades, ya que el gobierno está imposibilitado para supervisar en todo momento.

Un ejemplo de la eficacia de esta Ley de Agua Limpia es el caso de una compañía productora de jamones que descargaba en un río muchos residuos de ese producto. Una asociación del área manifestó que los residuos degradaban sus actividades de recreación y pesca, y además sabían que la compañía no había cumplido con sus permisos, ya que tenían acceso a sus registros públicos. Dieron la notificación de sesenta días y, al no recibir respuesta, la demanda procedió. Se recabaron pruebas fácilmente, se comprobó el beneficio económico de la compañía derivado de no eliminar la contaminación y finalmente se le fijó una cuantiosa multa. En este caso, el juez tomó en cuenta la gravedad de la infracción, los beneficios económicos que obtuvo el contaminador, su historial de infracciones, pero también sus esfuerzos de buena voluntad, y el impacto económico de la sanción en la compañía.

El tercer ejemplo del papel de un juez en asuntos ambientales es un caso basado en la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales. Si un residuo peligroso se elimina de un sitio por daño o amenaza al medio ambiente y puede comprobarse intención de la parte que contaminó para realizar la limpieza del sitio, en este sentido, el juez debe buscar los mecanismos para que se realice dicha limpieza por el agente contaminante. Estos casos pueden causar diferentes problemas a los jueces: el primero es que, con mucha frecuencia, los registros sobre “quién puso qué” en el confinamiento están incompletos y no son confiables, además de que existen dificultades científicas para evaluar las concentraciones de sustancias, el riesgo que esto significa para el medio ambiente y la incertidumbre con respecto a las opciones para resolver estos problemas. Esto puede relacionarse con un caso en donde el municipio traspasó a particulares un tiradero de basura, con el resultado de que, eventualmente, varias compañías depositaron en el lugar residuos peligrosos, algunas con autorización estatal, al punto de que se creó una montaña de residuos peligrosos. La resolución de este caso tardó varios años. Primero, se dividió el caso en grupos responsables y se decidió no ir a juicio sino resolverlo vía negociaciones. En las negociaciones se acordó remediar, se establecieron las contribuciones de cada grupo responsable, se hizo público este acuerdo para recepción de comentarios sobre la solución y, finalmente, se autorizó el acuerdo. La limpieza del sitio se mantiene hasta la fecha.

JUDICIAL ROLES IN ENVIRONMENTAL CASES*

Jerome SIMANDLE

Three examples of judicial roles played in environmental cases were mentioned in this presentation. The first example was the judicial review of administrative actions, based on the NEPA (National Environmental Policies Act) statute. A second example was a case determined under the Clean Water Act. The judge's role was to discover the facts in complex environmental matters. The third example was when judges have a mixed role in which they both interpret and review what an administrative agency had determined regarding the appropriate clean-up of a sanitary confinement site, seeking facts regarding who should be responsible and what the final consequences should be for those responsible.

The National Environmental Policies Act (NEPA) requires the preparation of an environmental impact report by a federal agency, and requires that such a report be made accessible to the public for its comments. This should be done for any proposal for major federal actions that have a significant environmental impact. Judges, for their part, should review any case presented along these lines by citizens. This law offered procedures for judges, establishing statutes and procedural requirements for the statutes. Nevertheless, the judges were required to interpret some of the statutes and to establish the degree of deference that should be granted to administrative efforts. Consequently, the judges had to become familiar with this new role, enforcing laws on environmental impact assessment that are obligatory for all federal agencies.

An example of the above is a case for conserving a park in the United States. The government had decided to finance an inter-state highway that would pass right through a public park. The citizens living nearby

* 2005.

met together in a group, and told the Secretary of Transportation that it had failed in its obligation to provide an appropriate environmental assessment of the impact of its decision. The first question confronted by the courts was regarding the right of these citizens to approach the Court on this matter, and it was decided that they did, since they had been living in an area that should be protected by the rights established in NEPA, and secondly, these citizens were able to demonstrate that they would experience personal harm if the highway would be built.

This emerged from the judicial decisions issued, since NEPA does not have a chapter that establishes the rights of individuals. The judges interpreted this statute and through jurisprudence, this concept of going to court was developed. In this case the Department of Transportation was obliged to repeat the environmental impact assessment, and in the end the project was stopped—not through a court decision but because alternative solutions were found for the appropriate construction of the highway.

The second example on the role of judges in environmental cases comes from the Environmental Pollution and Clean Water Act of 1970. At the time, there was concern about the quality of water in the United States. Originally, legislation for controlling water pollution was at the state level, but there were weaknesses in this approach, since it was very difficult to prove that a specific discharge of pollutants had indeed produced environmental damage, since there were multiple sources of contamination entering a single waterway. The law was changed in 1972 (Clean Water Act), requiring federal government supervision. Through federal and state permits, technological and economic viability was established and the strictness of standards was increased over the years. Now, someone discharging wastes into a waterway must use the best technological available.

Therefore, it is possible to file complaints through agencies or through citizens. The latter must send notification to state and federal environmental authorities regarding the existence of a violation and the contamination of water. If 60 days go by without any action, the complaint filed by the citizens will move forward. Citizens are able to obtain information since under clean water legislation, every company that discharges wastes with a permit is required to conduct studies and honestly report the results from those studies (required for their permits). This information is available to the public—in the interest of transparency. Complaints filed by citizens are a very important contribution aimed at alerting authorities, since it is impossible for the government to be directly supervising at all times.

An example related to this clean water legislation is the case of a ham-producing company that generated a great deal of waste, which was discharged into a river. A local association complained that the wastes were deteriorating their recreation and fishing activities, and since it had access to the company's public records, it knew it had not complied with its permits. After 60 days, when there was no response, the complaint process moved forward. Proof was easily established and the economic benefit for the company, by not eliminating its contamination, was also easily established, and finally, a very large fine was imposed on the company. In this case, the judge considered the following elements: the seriousness of the offense, any economic benefit received by the party responsible for the contamination, the company's history of violations, the company's efforts in good will, and the economic impact from the penalty imposed.

The third example of a judge's role in environmental matters was a case based on comprehensive legislation on environmental response, compensation and responsibility for hazardous wastes that negatively affect a human environment. If a hazardous waste is dumped at a site where it is damaging or threatening the environment and if it can be proven that a certain party did so knowingly, such a party will be required to cover the costs of cleaning up the site. These cases can cause a range of problems for judges. First of all, the records on "who put what" in a sanitary confinement are frequently incomplete and unreliable. Also, there are scientific difficulties in evaluating the concentrations of substances and the corresponding risk for the environment, and there is uncertainty as to the options for resolving such problems. This matter can be linked to a case in which a municipal government had a trash dump, which was subsequently passed over to private hands. Eventually, several companies deposited hazardous waste there—some authorized by government authorities. What was created was a mountain of hazardous wastes. It took a period of years for this case to be resolved. First of all, the case was divided into responsible groups, and the decision was made to not go to trial, but to rather resolve the case through negotiations. Agreements to remedy the situation were made through the negotiations, the contributions of each responsible group were established, and the agreement was made available to the public for its comments on the solution reached. Finally, the agreement was authorized, and the clean-up of the site continues to date.